

Impacto de la Gestión de Proyectos Productivos como Alternativa Económica para la  
Reintegración Social de Agentes Desmovilizados en el Departamento de Huila – Colombia

Línea de Investigación  
Desarrollo Económico Sostenible, en Gestión de Proyectos

Diego Alexander Álzate Maya

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  
Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN  
Especialización en Gestión de Proyectos  
2019

Impacto de la Gestión de Proyectos Productivos como Alternativa Económica para la  
Reintegración Social de Agentes Desmovilizados en el Departamento de Huila – Colombia

Diego Alexander Álzate Maya

Proyecto de grado para optar el título de Especialista en Gestión de Proyectos, bajo la modalidad  
de monografía

Director

Mg. Guillermo Camero Escobar

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  
Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN  
Especialización en Gestión de Proyectos  
2019

## Nota de Aceptación

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Jurado 1

\_\_\_\_\_  
Jurado 2

Bucaramanga/Santander Colombia, Diciembre 07 del 2019

## **Dedicatoria**

Dedico este triunfo a:

Dios por darme la oportunidad, el entendimiento y proporcionarme los recursos necesarios, para  
llegar con optimismo y satisfacción a la meta.

Mi madre, esposa e hija, ellas son el motor que impulsan y le dan sentido a mi vida. Supieron  
comprender y valorar las horas que no estuve presente, por cumplir con el deber que hoy me  
llena de complacencia, porque el beneficio será para todos.

## **Agradecimientos**

Agradezco altamente a:

La Universidad Nacional Abierta Y A Distancia – UNAD y el cuerpo docente, con su dirección y su saber se logró culminar el currículo satisfactoriamente.

Mg. Guillermo Camero Escobar, por su apoyo, dedicación y acompañamiento profesional, hasta lograr la obtención de lo ideal, la exigencia es calidad, formación y finalmente el producto se obtuvo del querer y un gran esfuerzo.

Todos aquellos que de alguna forma contribuyeron e hicieron posible culminar exitosamente.

## Tabla de Contenido

Resumen.....	9
Abstract .....	10
Introducción .....	11
1. Planteamiento del Problema .....	13
1.1. Descripción del Problema .....	13
1.2. Formulación del Problema.....	15
1.3. Valoración del Problema.....	15
2. Justificación .....	19
3. Objetivos .....	21
3.1. Objetivo General.....	21
3.2. Objetivos Específicos.....	21
4. Marco Conceptual .....	22
4.1. Acciones para la Paz y el Posconflicto. ....	22
4.2. Del Desarme Desmovilización y Reintegración .....	24
4.3. Economía y Potencial Humano.....	28
4.4. Políticas y Programas Sociales en el Posconflicto.....	30
5. Marco Teórico.....	32
5.1. Desmovilización en el Departamento de Huila .....	32
5.2. Inclusión del Excombatiente al Ámbito Laboral .....	37
5.3. Los Proyectos Productivos y el Reintegro .....	43
6. Conclusiones .....	46
Opinión personal.....	59
Referencias Bibliográficas .....	48

## Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Promedio de población reintegrada en el Departamento del Huila por sexo....	42
Tabla 2. Promedio de reintegrados en el Departamento de Huila por edad.....	42
Tabla 3. Análisis comparativo de oferta de empleo para reinsertado bajo criterio de empresarios Pyme.....	54

Abreviatura	Significado
ACR	Agencia Colombina para la Reintegración
ADR	Agencia De Desarrollo Rural
ARN	Agencia para la Reincorporación y Normalización
CERAC	Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
CNR	Consejo Nacional de Reincorporación
CONPES	Consejo Nacional de Políticas económicas y Sociales
DDR	Desarme Desmovilización y Reintegración
ETCR	Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo
INCODER	Instituto Colombiano De Desarrollo Rural
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PNRSE	Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de la FARC-EP
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje



## Resumen

Con el presente estudio, se hizo un seguimiento, análisis y descripción, de los aportes que brinda la literatura, sobre los mecanismos que han venido impactando el desarrollo económica y social en Colombia durante el posconflicto, de la vinculación laboral y la nueva infraestructura productiva para facilitar la inclusión socioeconómica de las personas desmovilizadas, en proceso de reincorporación a la vida civil, en el departamento de Huila, quinquenio correspondiente a 2013-2018. El procedimiento se inicia identificando la situación problema, para valorarla y determinar su importancia y relevancia, en una segunda fase, desde un marco teórico se hace un análisis y descripción del impacto que han tenido los proyectos productivos, como mecanismo de inclusión económica, para la reincorporación social de la población desmovilizada, en el departamento de Huila- Colombia.

*Palabras claves:* desmovilizado, inclusión, proyectos productivos, proceso, reintegración, sociedad, económico, rentable.

### **Abstract**

With the present study, was made a follow-up analysis and description of nowadays literature, with the different parties that have been impacting the linking to two relevant economic factors, Work and the Economic development of the people described process of reintegration to civil life in Colombia back their civilian life. Emphasizing on the Department of Huila for the 2014-2018 quadrennial. The procedure begins by identifying the problem situation, to assess it and determine its importance and relevance, in a second phase, from the theoretical framework is an analysis and description of some scientific elements, which support inclusion in the labor market, profitable production and lasting, the strategies applied in the reintegration processes that are developed in Colombia and the management of social inclusion of ex-combatants in the country that can be described as successful, to guarantee peace.

*Keywords:* demobilized, inclusion, productive projects, reintegration, society, economic,

## Introducción

El proceso de paz en Colombia impulso la necesidad de crear leyes y nuevas instituciones; con el fin de confrontar la situación de posconflicto y el fenómeno de la desmovilización y resocialización, de las personas que tomaron la decisión de abandonar las armas y la clandestinidad. Los nuevos organismos vienen trabajando y aplicando estrategias, para cumplir con los acuerdos y facilitar el acceso a los servicios y productos, en beneficio de la “reincorporación” de los excombatientes a la vida civil y la permanencia en la legalidad.

De los temas tratados, la implementación de mecanismos para potenciar el progreso económico y social de los desmovilizados, captó especial interés a nivel nacional e internacional por ser la economía, un factor dominante en la modificación de los estándares de vida personal y comunitaria, llevando las regiones en algunos casos a un nivel superior de organización y en otros al retroceso. Los expertos consideran la gestión de proyectos productivos sostenibles; como un mecanismo relevante para la inserción económica de las personas desmovilizadas y para una inclusión social exitosa, que apunte al desarrollo económico y social del país.

La guerra como conflicto socio-político, ha sido clasificada dentro de los factor limitante del desarrollo socio-económico porque produce exclusión, impidiendo a un grupo de persona ejercer el derecho ciudadano a la participación, para un normal desarrollo de la vida civil, los involucrados quedan excluidos de las actividades políticas y económicas que regulan la vida en sociedad (Burchardt, 2000), situación que puede llevar a múltiples privacidades, (Sen, 2000).

La reintegración económica es fundamental; para que el desmovilizado logre alcanzar ciertos beneficios y disfrutar de la igualdad de oportunidades, donde pueda favorecerse de bienes y servicios para una vida digna, avanzando en el progreso personal, del grupo familiar y de la comunidad. La estabilidad económica produce satisfacción física y mental en los individuos y dilata las diferencias sociales, conservando el bienestar del ser humano con su modo de vida, la interacción con otros individuos y con su entorno.

Los combatientes de la guerra, al cambio de circunstancia producida por la desmovilización, se enfrentan a un proceso de reintegración que busca la rehabilitación de la persona, la convivencia pacífica y finalmente el progreso económico del país opacado por el conflicto armado interno. En este orden de ideas, el gobierno a través del programa “DDR”, con la implementación de proyectos productivos y la colaboración de las empresas privadas, ofrece las estrategias de inclusión económica con posible rentabilidad, para generar capital propio y potenciar la economía de los excombatientes.

Sin embargo, se sigue apreciando la tensión social entre el gobierno y los reintegrados; por la insatisfacción que origina la falta de oferta laboral y la gestión retrasada de proyectos productivos, en beneficio de la población desmovilizada. De lo expuesto, surge el presente estudio con fundamentos en la revisión de la literatura existente y con el objetivo de reconocer, el impacto de la gestión de proyectos productivos sostenibles, como alternativa económica para la inclusión social de la población desmovilizada en la región de Huila.

Se tomó como referencia los aportes suministrados por el “Análisis Cartografía del Posconflicto en el Departamento de Huila”, documento desarrollado en el año 2017 por los entes gubernamentales regionales, los informes de la ARN sobre los avances de la gestión, durante el quinquenio comprendidos entre 2013-2018 y la literatura de otros investigadores y expertos.

El estudio parte de una visión general del conflicto armado interno en Colombia y se desarrolla en cuatro etapas, revisión de literatura, planteamiento del problema, marco conceptual, marco teórico y las conclusiones. Durante el desarrollo se visualiza, analiza y describe el fenómeno de la inclusión social sus avances y limitaciones, para dilucidar el impacto de los proyectos productivos como alternativa económica para la reincorporación a la vida civil.

## **1. Planteamiento del Problema**

### **1.1. Descripción del Problema**

En las 2 últimas décadas, el estado colombiano viene adelantando acuerdo de paz; con algunos grupos al margen de la ley que intervienen en el conflicto armado interno. Como parte de los compromisos asumidos por el gobierno, se plantea el proceso de reintegración económica y social de la población desmovilizada para la “reconstrucción del tejido social” (Bleier, 2011), entrando en una nueva etapa de posconflicto, con su complejidad e implicaciones.

Al proceso se vienen vinculando instituciones públicas y privadas. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), en representación del gobierno procuran ofrecer garantías y orientar a los excombatientes en el camino a transitar para lograr el reintegro exitoso a la sociedad.

La ARN, a través de la contratación hecha por las empresas privadas y la creación y puesta en marcha de proyectos productivos, gestiona la inclusión social y económica de los reintegrados para brindarles la oportunidad de generar recurso económico y capital propio, con el objetivo de mejorar su proyecto de vida y promover su permanencia en la legalidad, para finalmente impactar el desarrollo económico y social del país.

No obstante, en las voces de los actores se manifiesta la insatisfacción por la falta de oportunidad laboral y el retraso para la creación y puesta en marcha de negocios productivos, como alternativa para aumentar las fuentes de trabajo y por consiguiente los ingresos económicos, para satisfacer las necesidades básicas, la situación perturba la reconstrucción del proceso de paz, por la alta posibilidad de reincidir en la violencia; con el reintegro de los excombatientes a nuevos grupos ilegales o por la pérdida del interés en el proceso de reincorporación.

La problemática influye de manera directa en el progreso económico y social del país, porque revierte el avance de las regiones, una vez que la población civil se ve amenazada y

condicionada por los efectos de la delincuencia, con su modo operante donde impera la extorsión, los secuestros, el negocio del narcotráfico y el control de la vida cotidiana.

Las regiones entrarían en retroceso, por el desplazamiento masivo, la migración en la ciudad y la inactividad productiva. En el caso del departamento de Huila, donde se ha recibido un número significativo de personas desmovilizadas, (Machado, 2017), la situación es provocada por la falta de oportunidad laboral en el mercado formal y la gestión lenta de los proyectos productivos, para la solución de las necesidades básicas inmediatas.

El director de la ARN en Huila encontró como dificultad para la inclusión social, la incidencia en la estigmatización hacia la población desmovilizada y la falta de tierra. “(...) el tema de la tierra era un inconveniente que había que resolver porque los terrenos son recurso necesario para adelantar los proyectos productivos”. (Londoño, 2017).

Una parte de la buena marcha de la economía de las personas y del país, la constituyen las tasas de empleo, activadas por el gobierno a través de políticas públicas, para procurar cumplir con el objetivo de impulsar el crecimiento económico sostenible, de aquí la importancia de tomar medidas especiales frente a situaciones de vulnerabilidad. Por consiguiente, las políticas de intervención económica deben estar direccionadas a su efectividad en los procesos internos, para sostener la producción de bienes y servicio en el tiempo y lograr el bienestar de la sociedad.

La política, el progreso económico y social, no se puede desligar cuando se quiere lograr el equilibrio, el avance de las distintas poblaciones y la convivencia pacífica. De la economía, la sociedad y la política, en su análisis de coyuntura, Peresson, (1997) expresa:

Es artificial separar lo económico de lo político. El hecho de producir es también un hecho político por ser también una relación social. Por eso es importante percibir lo económico y lo político como dos dimensiones de un mismo fenómeno global, siendo la coyuntura política la expresión de la coyuntura económica. (p.8).

Como se ha indicado, la reintegración a la sociedad después de la desmovilización es un proceso complejo de participación social, política y económica, que requiere de la evaluación de las necesidades de cada región y de la intervención enérgica del gobierno y la sociedad.

## **1.2. Formulación del Problema**

¿De qué manera el impacto de la gestión de proyectos productivos en el departamento de Huila es una alternativa económica para la reintegración de agentes desmovilizados a la sociedad colombiana?

## **1.3. Valoración del Problema**

El problema objeto de estudio, es una situación susceptible de abordar científicamente, porque con su análisis y descripción, se pueden hacer especificaciones sobre la problemática y contribuir a su conocimiento. Se considera un problema fenomenológico, por su carácter real percibido por sus actores, desmovilizados, organizaciones gubernamentales, medios de comunicación y por la sociedad en general. Se busca que su estudio y descripción sea útil, para exponer aspectos importantes de las fortalezas y debilidades, que presenta la gestión de proyectos productivos como alternativa de inclusión económica.

Del estado del arte se encontraron escenarios similares al de Colombia, como el caso de El Salvador, país de Centroamérica que desmovilizó a la guerrilla y en el proceso de posconflicto, toma como mecanismo de inclusión económica los proyectos productivos, el modelo se fundamentó en la creación de latifundios de explotación agraria y colectiva a grandes dimensiones, con la estrategia lograron la posición de El Salvador, en el cuarto país de Centroamérica con una economía sólida. (Azam, 2019).

El proceso de reintegración económica y social en El Salvador no tuvo respuesta, los desmovilizados reincidieron en la violencia y el crimen organizado. Se conformaron nuevos

grupos al margen de la ley, reconocidos como pandillas, la política pública para impulsar la reintegración a la vida civil no progreso. Sin embargo, el posconflicto trajo como ventaja el desarrollo de la producción industrial agrícola, dándole el crecimiento económico al país.

En marzo de 2016 el presidente Salvador Sánchez Cerén, anuncio un conjunto de medidas extraordinarias para derrotar la nueva insurgencia en su país expresando, “acabarían con las pandillas que habían convertido a El Salvador en el país con el mayor número de homicidios sobre la faz de la tierra” (Azam, 2019a).

En Honduras después de la guerra interna, para rehabilitar la esfera económica y minimizar la pobreza, también se ejecutaron proyectos productivos sostenibles; con el fin de garantizar el derecho a la alimentación e incrementar el ingreso económico de la población vulnerable, el propósito era respaldar “los sistemas de producción a pequeña escala, sostenibles, equitativos y resilientes”. Se le dio vital importancia a la producción deficitaria, productos considerados escasos y necesarios, como los granos; con la estrategia se lograron en parte los objetivos. (ONG, Contra la Pobreza en el Mundo. Mans Unides).

La pobreza causada por la guerra en Guatemala, donde los asentamientos clandestinos de la guerrilla y la militarización del país por parte del gobierno, no permitió el desarrollo económico sostenible, impulso la decisión estratégica de promover proyectos productivos, respaldados por el MAGA, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación de Guatemala, ofreciendo asistencia técnica y el capital semilla, con la estrategia se avanzó en la inserción laboral de campesinos y pequeños productores y se creó una red de exportación de productos agrícolas.

En Colombia, se han realizado algunas investigaciones con relación al tema de la inclusión económica de agentes desmovilizados, entre otras se encontró la indagación de la Universidad San Buenaventura, titulada, análisis de logros y dificultades del programa de proyectos productivos para los desmovilizados de la Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá 2006-2008. Con la indagación se hizo una evaluación de la eficiencia del programa de proyectos productivos; como parte de las políticas públicas, gestionadas desde la alta consejería.



Del trabajo, se concluyó que la capacitación brindada a los desmovilizados de la localidad Rafael Uribe, Uribe de Bogotá, era escasa para organizar planes de trabajo y emprender su propio negocio, estable y productivo. (Blanco, 2009, p.86).

La investigación, hacen referencia a la importancia de la capacitación y el desarrollo de competencias, para desempeñar una actividad productiva, al no poseer los conocimientos necesarios, se les dificultaba producir. Según la indagación, existía un déficit en el recurso humano, un limitante para desempeñarse de manera eficientemente.

En la Universidad de la Salle, en la investigación titulada, la reincorporación social del desmovilizado a través de proyectos productivos, se señala que en el departamento de Casanare de 35 reinsertados que iniciaron capacitación por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, solo 13 la terminaron. Desertaron por falta de interés y hábitos para un proceso de aprendizaje.

Además, hacen referencia a la restricción para el ingreso de los excombatientes a los diferentes programas, por considerarse que deben ser atendidos como grupo especial. (Frayle, Reyes y Rodríguez, 2007, p.12).

Por su parte, la Mesa Técnica del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), informó de la aprobación de 17 proyectos productivos colectivos, 2 con el recurso para la ejecución, 6 en proceso logístico, por la compra de tierra y la ausencia del fallo de aprobación de proyectos productivos individuales, por esta razón el gobierno expidió el Decreto 1212 de 2018, para asignar a la ARN la verificación, viabilidad y aprobación de los proyectos productivos individuales.

En la voz del CNR, se dio a conocer en el año 2018, la implementación de nuevos proyectos productivos, favorables a la actividad económica en las regiones de, Antioquia, Meta, Cauca, Nariño, Quindío y Chocó, con beneficio para la población desmovilizada de la FARC – EP y su grupo familias. (Consejo Nacional de Reincorporación. 2018, sesión 88).

La ARN, presento un nuevo registro con una cifra aproximada de 1.000 personas desmovilizadas con sus familias, en nuevos asentamientos y regiones donde funcionaban proyectos productivos, manifestando que entraba a establecer medidas para vincular a los excombatientes. (Componente de Verificación Internacional. CINEP-CERAC. Informe 2018).

## 2. Justificación

Alcanzar la paz después de un largo periodo de guerra, es una finalidad de grandes envergaduras por el desafío que representa, equilibrar la vida civil de víctimas y desmovilizados, en la reconstrucción de su proyecto de vida a corto y largo plazo. Según los expertos, la principal motivación de los reinsertados, para no retornar a la violencia es conseguir un sustento económico digno y duradero, que le conceda el estatus de sujeto de derecho, donde pueda producir de una alternativa diferente a la ilegalidad.

De igual forma; el desafío es poder crear las condiciones favorables para propiciar la inclusión social y económica de los excombatientes, ofreciéndoles la oportunidad de alcanzar su pleno potencial y aportarle a la productividad, para su bienestar y el desarrollo del país. Las políticas públicas, los mecanismos utilizados y el entorno social, juegan un papel fundamental en el logro de la inclusión económica y social de los reintegrados, en las directrices, la gestión, la aceptación, la disposición a contribuir con el proceso y la responsabilidad de la convivencia.

Reintegrar es volver a incluir requiere de un proceso, debido a que la exclusión social del agente armado es un estado negativo, el combatiente emocionalmente asume estar excluido; por el entorno en el cual ha convivido y los mecanismos utilizados para la subsistencia en la clandestinidad, la sociedad lo rechaza como consecuencia de la violencia. Al cambio de circunstancia en la decisión de abandonar las armas, el excombatiente necesita de un proceso de inclusión, que le dé seguridad, aceptación de sí mismo y de la sociedad.

Por las razones expuestas anteriormente, la reintegración a la vida civil de los desmovilizados, ha desplegado una serie de acciones, encaminadas a impulsar la inclusión económica. La empleabilidad y los proyectos productivos sostenibles, son los mecanismos utilizados para iniciar el despegue monetario, que permita generar un margen de utilidad, mejorar la calidad de vida y asegurar la permanencia en la legalidad.

Se consideró la oferta laboral y el trabajo, como elementos políticos, económicos y sociales significativos; para el proceso de reincorporación, por el estado de inactividad en el que entran los desmovilizados al abandonar las armas y considerando que, activar la vida económica de los colombianos es uno de los fines esenciales del Estado, “(...) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. (Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 2).

Así las cosas, esta investigación científica, se fundamenta en la revisión de la literatura existente, sobre el proceso de reintegración económica y social desarrollado en el país, durante el quinquenio comprendido entre 2013 – 2018, particularmente en el departamento de Huila, con el propósito de indagar las fortalezas y debilidades, en los mecanismos utilizados y los fenómenos adyacentes a la inclusión económica de los excombatientes del conflicto armado interno.

Es relevante y viable; porque se hace una exploración de la situación de posconflicto, profundizando los conocimientos sobre los avances y retrocesos, por los cuales ha pasado el proceso de reintegro económico. Las conclusiones de este trabajo permiten seguir aportando luces sobre la visualización del impacto de los proyectos productivos, utilizados como alternativa de inclusión económica y el contexto social que rodea las acciones.

La universidad se beneficia, porque puede contar con información científica sobre un fenómeno social histórico, y como antecedente para orientar y ampliar otras investigaciones similares. En el beneficio propio, es útil en la acumulación de conocimientos profesionales y posterior aplicabilidad en el campo de trabajo.

### **3. Objetivos**

#### **3.1. Objetivo General**

Reconocer el impacto que ha tenido la gestión y puesta en marcha de proyectos productivos sostenibles, como alternativa económica para los agentes desmovilizados en ruta de reintegración a la vida civil en el departamento de Huila, Colombia.

#### **3.2. Objetivos Específicos**

- ✓ Percibir la influencia de los proyectos productivos sostenibles, desde la perspectiva de su efectividad para la inclusión laboral y económica, de los agentes desmovilizados en proceso de reincorporación a la sociedad, en el departamento de Huila.
- ✓ Revelar qué representa la actividad económica sostenible, para la normalización de la vida presente y futura, de los excombatientes del conflicto armado interno en Colombia, en proceso de reincorporación y de su grupo familiar.
- ✓ Expresar qué tanto participan los desmovilizados en la puesta en marcha y continuidad de proyectos productivos, como actividad económica sostenible, para mejorar sus ingresos y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y el bienestar.
- ✓ Facilitar el acceso a nuevos conocimientos sobre la manera como se gestiona y desarrollan los proyectos productivos, para que sean útiles en la continuidad de investigaciones similares, que den luz a una futura transformación.

## **4. Marco Conceptual**

### **4.1. Acciones para la Paz y el Posconflicto**

La Ley 975 de julio 25 de 2005, aprobó y legalizó el proceso de paz, para la incorporación individual y colectiva a la vida civil, de exintegrantes de grupos armados al margen de la ley, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y búsqueda de la paz y facilitar los acuerdos humanitarios. La Ley de Justicia y Paz, se emite con la desmovilización de los grupos paramilitares y otros acontecimientos productos del conflicto interno, siendo uno de los más notables; la crisis humanitaria que produce utilizar el desplazamiento forzado como instrumento de guerra y las políticas de seguridad democrática.

Paralelo al inicio del proceso de paz, se prepararon las acciones pertinentes para cumplir con las disposiciones de la norma, así surge la Alta Consejería del Gobierno para la Reintegración, sufriendo modificación en el transcurso de los años, donde se fueron incrementando sus funciones, paso a ser Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y actualmente, ARN, Agencia para la Reincorporación y Normalización.

La ARN, depende directamente de la presidencia de la república, por ser una entidad creada por el gobierno para coordinar, asesorar y ejecutar, la reintegración de los excombatientes a la vida civil, en su accionar recibe apoyo de instituciones públicas y privadas. Con la firma del Acuerdo Final, la ARN se direcciona a la reincorporación de los exintegrantes de la FARC y continúa con la responsabilidad de intervenir el proceso de reintegración de personas y grupos armados al margen de la ley que decidan desmovilizarse voluntariamente. Entre sus funciones se encarga de aprobar, implementar y supervisar la puesta en marcha de proyectos productivos, para la inclusión económica. (Decreto 897, de 2017).

La firma del Acuerdo Final le dio paso a una nueva política pública, conocida como Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC, (PNRSE),

para orientar la reincorporación integral de los excombatientes de la guerrilla de la FARC y su grupo familiar, atendiendo sus necesidades e intereses, en el acuerdo se incluyó el acceso a mecanismos y recursos para la estabilización y proyección económica (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2016. D, 3931).

Además, se creó el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), cuyo objetivo es definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación a la vida civil de los exintegrantes de las FARC-EP. (Decreto 2027, de 2016).

La política que surgió para la desintegración de la FARC-EP, se creó porque los exintegrantes no se acogieron al programa DDR, que se viene ejecutando en Colombia con las desmovilizaciones individuales y colectivas, por considerarse un grupo especial, se establecieron las condiciones para suministrarle a la desmovilización de la FARC, un enfoque diferencial.

A nivel local, para el año 2016 en el departamento de Huila los entes gubernamentales, con la participación de las comunidades y la Organización Internacional para las Migraciones, trazaron un análisis cartográfico y social de la región, como un diagnóstico local para la desmovilización y riesgos de incidencia en la violencia, se logró facilitar el dialogo entre las comunidades y las autoridades, dando como resultado la elaboración de una herramienta de planeación y priorización geográfica, con el fin de preparase para las eventualidades del posconflicto.(Organización Internacional para las Migraciones, 2016).

La dinámica sirvió de prevención a la gobernación de Huila, ante los posibles riesgos e imprevistos que pueden presentarse y para conocer la situación y proyección del proceso de reintegración en la región. El “Análisis Cartográfico del Posconflicto en el Huila”, también ha servido como documento de consulta para la presente investigación.

#### **4.2. Del Desarme Desmovilización y Reintegración**

En Colombia, el gobierno estableció los espacios de concertación y toma de decisiones, con la creación de instituciones de apoyo y programas para orientar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración a la sociedad, en cumplimiento a la obligación de construir paz, como parte de un derecho constitucional. (Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 22).

El programa de “Desarme Desmovilización y Reintegración” DDR, se crea y desarrolla bajo los “lineamientos” y veeduría de la ONU, para apoyar la desmovilización y el proceso de posconflicto en la inclusión social, por lo general el programa se pone en marcha en países devastados por la guerra y puntualiza en aspecto como la sensibilización, seguridad, equidad de género, la salud y estabilidad de los excombatientes.

Su principal objetivo es facilitar mecanismos y recursos para la inclusión social, sin embargo el paso de los excombatientes por el programa de DDR, no garantiza la permanencia de los desmovilizados en la legalidad. El programa enfoca sus esfuerzos en 3 etapas, el desarme o procedimiento legal entre el combatiente y la justicia, para la entrega y recolección de armas de corto y largo alcance, explosivos, artillería pesada y liviana, utilizadas por los grupos armados, en su poder, guardadas en caletas y otras veces en casas de la población civil, el desarme se da por decisión voluntaria o por negociaciones y acuerdos de paz.

La reinserción se conoce como un período de tiempo corto e inmediato a la entrega de armas, donde se ofrece a los desmovilizados, refugio, alimentación, apoyo a la salud y a la educación, para pasar a una tercera fase llamada reintegración.

La reintegración es la etapa extensa, de finalización en la permanencia dentro del programa DDR, con la que debe cumplir el desmovilizado satisfactoriamente, para considerarse reincorporado, en la simplicidad representa pulir la transformación del excombatiente, desde su actitud frente a la vida, hasta su preparación para la participación, social, política y económica.



La reintegración a la vida civil es un concepto señalado en el Decreto 128 de 2003, que estableció garantías socioeconómicas y jurídicas, para los desmovilizados; otorgando competencias dentro del proceso de inclusión social a instituciones como el Ministerio de Interior, Justicia y Defensa, y la vinculación de entidades de apoyo para liderar el proceso de inclusión económica, donde se indica la programación e instalación de proyectos productivos.

Al tema de la reintegración, se le da diferentes enfoques en las consideraciones de varios autores y son los mismos conceptos que se han tomado para darle forma a documentos públicos. En definiciones de Henao (2013), la reintegración es un proceso social y económico, donde el desmovilizado adquiere el estado civil y un empleo sostenible y se desarrollan en las diferentes comunidades involucrando a todo el país. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, siguiendo la línea de Henao define la reintegración de la siguiente manera:

Es el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo internacional. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2008. D, 3554).

Las desmovilizaciones individuales y colectivas se vienen acogiendo al programa de DDR, a diferencia de la FARC- EP, grupo que se desintegro con la creación de las “Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, o “Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación” (ETCR), que permiten concentrar las tropas desmovilizadas, monitorear el cese al fuego, brindando capacitación y apoyo para la creación de proyectos productivos, en beneficio a la inclusión económica de los excombatientes.

El departamento de Huila, aunque ha sido clasificado como un territorio de alta incidencia en la presencia de grupos guerrilleros, no posee Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR. Según informes de Eduardo Londoño, en diálogo con la Nación, el Huila

cuenta con dos Áreas de Reincorporación Grupal, en los municipios de Algeciras e Íquira. (La Nación, 2019. Artículo 925).

Para lograr de manera exitosa la inclusión de los excombatientes a la vida civil, la ARN, ha determinado un proceso de 6 años y medio, periodo que inicia cuando una persona o grupo, decide entregar las armas y se presenta ante la autoridad competente, para hacer el registro legal de su decisión y recibir apoyo de los entes encargados. No obstante, el periodo de 6 años y medio se considera insuficiente para un proceso exitoso.

La inclusión social es, “El proceso mediante el cual los grupos previamente excluidos logran adquirir ciudadanía o membresía plena en la comunidad social,” (Parsons, 1965). Expresado de otra manera, la inclusión social cuando se quiere construir paz, es la aceptación plena de la persona o grupo de persona, excluidas por diversas circunstancias.

El reintegrado se define como la persona que culmina de manera exitosa el procedimiento para recuperar su identidad como persona civil y es capaz de sostenerla y abandonar definitivamente la violencia. (Labrador y Gómez, 2010). En este sentido se habla de una rehabilitación integral del individuo, en su área emocional, económica y en la responsabilidad de no retroceder a la violencia, pero también de la aceptación y acogimiento por parte de la sociedad, que conlleve a la normal convivencia en comunidad.

La inclusión social es, “la capacidad y oportunidad de participación plena sin discriminación informal”, (Parsons, 1965a). Es decir que las acciones para impulsar la inclusión social deben contener estrategia para facilitar, la comunicación y reconciliación, la integración y el acogimiento; en la intervención plena de las personas o grupo reincorporados a los ambientes laborales, comunidades receptoras, participación política y decisiones que los afectan.

Para los agentes gubernamentales del departamento y la alcaldía de Huila, “El proceso de reintegración de excombatientes busca la generación de capacidades que posibiliten la inserción

económica y social de las personas desmovilizadas, con el fin de que ellas y sus grupos familiares puedan disfrutar de sus derechos” (Organización Internacional para las Migraciones, 2017).

En otras percepciones, la reintegración presenta dos tipologías, una social y otra comunitaria. La social, procura que el reinsertado a la vida civil no reincida en la violencia y la ilegalidad, y la comunitaria, establece los mecanismos de comunicación con la participación de actores gubernamentales, comunitarios, desmovilizados y víctimas, para iniciar el proceso de aceptación y reconciliación en las comunidades receptoras. (Herrera y Gonzáles, 2013).

En este sentido, las autoridades territoriales y las instituciones que apoyan la reincorporación de los excombatientes de la FARC, en el departamento de Huila; mantienen la alerta, por los resultados obtenidos a través del “Análisis Cartográfico del Posconflicto en el Huila”, donde se evidencia el riesgo de rearme y la creación de nuevos grupos al margen de la ley. Promediándose en alto riesgo el brote de violencia en los municipios de La Plata, Neiva y Pitalito. (Análisis Cartografía del Posconflicto en el Huila, 2017).

Se cree, que alguno de los factores que propician la situación de rearme son, el abandono del estado, la gestión lenta del proceso de inclusión laboral y la falta de coordinación entre los órganos que lideran el proceso de reintegración. Los proyectos productivos no fluyen; se presentan a los municipios y se enfrentan a un trámite lento que no permite trabajar, para mejorar las condiciones de vida, la situación es común para víctimas, desmovilizados, campesinos y pequeños productores que participan de forma fusionada en el emprendimiento.

La apreciación anterior lleva a pensar, que las políticas públicas no son sólidas para enriquecer el proceso de reintegración, de manera que puedan garantizar la no repetición de los actos violentos, por parte de los desmovilizados y la generación de ofertas laborales con verdadera oportunidad de inclusión económica, donde el reinsertado pueda iniciar y sostener su proyecto de vida a corto y largo plazo, los limitantes y las debilidad con la que avanza el proceso de reintegro se pueden observar en la lentitud y el incumplimiento a los pactos, la falta de voluntad de los

excombatientes para continuar los procesos de capacitación y la poca responsabilidad social frente al proceso de paz, con políticas débiles para enfrentar las necesidades locales.

#### **4.3. Economía y Potencial Humano**

El progreso económico se convierte en un elemento fundamental para construir paz, a nivel personal y colectivo, porque culturalmente el concepto que posee el hombre de vida digna, igualdad de derechos y oportunidades, está relacionada con su forma de producir y poseer bienes, que redunden en el bienestar de la persona y las comunidades.

Con la educación formal y capacitación de la población desmovilizada, se busca suplir la necesidad de ser eficiente para producir y encaminarse al progreso económico, estimulando el desarrollo de las capacidades para ejercer un oficio. Significa que para realizar una actividad productiva es indispensable el aporte de un potencial humano, conocido en el mundo de la economía como capital humano, esencial para el avance económico.

El capital humano es la energía aportada por la persona, fuerza física y conocimiento. “Las fuerzas productivas están constituidas por la fuerza de trabajo, energía física e intelectual, el objeto de trabajo, materia prima y los instrumentos de trabajo.” (Peresson, 1997. p.22).

El potencial humano es considerado por la psicología y las ciencias sociales, como las capacidades innatas que poseen los seres humanos y que se desarrollan a lo largo de la vida, algunos estudiosos lo definen como “una reserva mental y física” (William, s.f.), que puede ser aprovechada o desaprovechada, dependiendo del estímulo recibido.

Evaluar el potencial humano es el objetivo social y empresarial que presenta el contexto actual, la realización de un trabajo determinado significa para las personas, el logro particular de sus proyectos, tener un medio económico para suplir las necesidades básicas, aportándole al desarrollo personal, regional y nacional. Es la oportunidad que tiene el hombre de reconocer las

fortalezas y debilidades de su potencial, pero también de generar una ganancia útil a favor de su subsistencia y en general, el de su familia.

En el caso de los excombatientes; el trabajo puede representar un aspecto positivo o negativo para el reintegro a la vida civil, la rehabilitación del reinsertado es un proceso que tiene implicaciones psicológicas, de efectos sociales, donde el trabajo juega un papel importante como factor motivante, de logro, satisfacción, que le permite fortalecer la autoestima y la identidad con su entorno. En este sentido se puede decir que la ARN, en colaboración con otras instituciones, procura capacitar al desmovilizado en la práctica del trabajo, para suplir las exigencias empresariales y las necesidades personales.

Socialmente se cuestionan los bajos niveles de educación de los excombatientes, como impedimento para acceder a un empleo, sin embargo existen condiciones impuestas por la cultura, que se pueden clasificar, como limitantes de primer orden para la inserción laboral del reintegrado. El tema del conocimiento encuentra solución a corto plazo, en la educación no formal y la capacitación en oficios semi-calificados; para afrontar la necesidad inmediata de inclusión económica, y continuar la formación estructurada, a largo plazo.

En este mismo sentido, en algunas regiones se ofrecen oportunidades laborales que no ameriten altos conocimientos y aun en las empresas, las actividades productivas están clasificadas en manos de obra calificada y no calificada. Mientras que el rechazo de la persona en el ámbito laboral por la edad, es una posición social opuesta a las normas constitucionales, de escalabro a los derechos y una problemática, que no encuentra solución en la política de gobierno.

A lo expuesto anteriormente, se suma la informalidad de las contrataciones por parte de las empresas públicas y privadas, donde no se valora el capital humano y en general la estigmatización que lleva a la discriminación, son las condiciones que debe afrontar el desmovilizado al ser incluido a la vida civil, porque es la problemática actual de la sociedad colombiana y al ser incluidos no pueden ser ajenos a la misma.

De lo expuesto anteriormente se puede deducir, que el emprendimiento de proyectos productivos es una oportunidad laboral, donde juega un papel importante la responsabilidad, planeación, organización y toma de conciencia de los excombatientes en el compromiso de asumir roles de jefe y trabajador, y el aporte del estado en gestionar los recursos necesarios, orientar el proceso, crear los medios de vigilancia y verificación de la continuidad de los proyectos productivos, en garante de la estabilidad económica de la población desmovilizada.

#### **4.4. Políticas y Programas Sociales en el Posconflicto**

Las políticas y programas sociales enfocados al posconflicto en Colombia; vienen influenciados por los acuerdos pactados en las mesas de negociaciones y por la política de resolución de conflicto, método empleado por Estados Unidos en la desarticulación de los enfrentamientos bélicos, por lo general no se hace un análisis a fondo de las condiciones estructurales, sociales y económicas, para gestionar la solución a las necesidades que trae el posconflicto, para los actores implicados de manera directa y la sociedad civil.

Las políticas y programas sociales se han direccionado al desarrollo local, sustancialmente a las áreas rurales, por la evolución misma del conflicto armado que tuvo su origen en las disputas por la tierra, para tratar de recuperar el campo colombiano y con la posibilidad de brindar oportunidad laboral a través de la creación de negocios productivos, que permita facilitar el acceso al mercado y a los medios de producción.

Las políticas en sí y los programas sociales, no están encaminados a beneficiar a un determinado grupo, una vez que la misma situación del conflicto interno ha dejado en la exclusión social, a campesinos, víctimas, pequeños productores y a cada persona, que derivaba su sustento de las labores del campo. En esta línea de actuación se busca a corto plazo el despegue de actividades productivas a pequeña escala, cuyo propósito es suplir la necesidad inmediata y futura.

Los proyectos productivos individuales, asociativos y colectivos, buscan favorecer la inclusión de los grupos vulnerables, desde una perspectiva diferente al mercado formal, y su puesta

en marcha depende de la cooperación humanitaria, la voluntad y fuerza de trabajo de sus beneficiarios y el apoyo de la sociedad, razón por la cual necesitan de una política pública sólida.

La política pública es “un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos, para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2012, citado por Jatib).

En el contexto colombiano se observan algunas transformaciones en la estructura jurídica, y se establecen políticas públicas dando origen a instituciones y programas de apoyo, pero la integración a la vida civil, es un proceso que se muestra débil para la inclusión económica, por falta de una política pública que establezca las directrices para la gestión de negocios productivos y la participación de los excombatientes bajo objetivos y procesos bien definidos, donde no se confunda la existencia de la política pública, con una simple respuesta del estado a un evento exterior problemático, como lo es el conflicto armado interno.

Sin lugar a duda, si no nos preparamos con las herramientas adecuadas tanto de tipo jurídico, político y psicosocial para la superación de los conflictos entonces vamos a quedar perpetuamente atrapados en odios que ya durante muchas décadas han hecho mella en la conciencia de muchos colombianos y que nos han dificultado llegar a la tan anhelada reconciliación. (Restrepo, 2003).

La apreciación anterior se originó por el contexto presentado en la reintegración de las AUC, el autor se refería a los vacíos de las políticas públicas; que habían dejado en el olvido la gestión de proyectos productivos y se habían enfocado, en la rehabilitación emocional de los excombatientes y la ejecución de la justicia, dejando entre ver que la inclusión económica de los reintegrados es un proceso débil desde acuerdos de paz anteriores, en ambas perspectivas, en el mercado formal y en la creación de negocios productivos.

## 5. Marco Teórico

### 5.1. Desmovilización en el Departamento de Huila

El conflicto armado en el país por su continuidad, presenta la singular característica de varios procesos de paz, y espacio de posconflicto sin el cese total de los enfrentamientos bélicos, siendo el departamento de Huila; uno de los territorios donde se recibe de manera directa la influencia de los grupos armado al margen de la ley, razón por la cual en los últimos acuerdos de paz viene inyectando un número significativo de personas desmovilizadas a los procesos de reintegración, comprometiendo a los entes regionales en la inclusión social exitosa.

Para el año 2014 en seguimientos hechos por la gobernación y alcaldía de Huila, se reportó la presencia de cuatro grupos guerrilleros de la FARC, la columna Teófilo Forero Castro, Frente 17 Angelino Godoy, Frente 13 Cacica la Gaitana y Frente 66 Joselo Lozada, que accionaban por razones, políticas, sociales y económicas, encontrando acoplamiento por la posición geográfica del territorio y el beneficio de ser corredor vial a Caquetá, Cauca y el Pacífico. (Análisis Cartografía del Posconflicto en el Huila, 2017).

Los grupos activos en el Huila, iniciaron su desmovilización en el año 2015 introduciendo a la ruta de reintegro 849 personas. Los talleres desarrollados por la gobernación, promediaron la población desmovilizada por sexo, de la siguiente manera.

Tabla 4

*Promedio de población reintegrada en el Departamento del Huila por sexo.*

Total, Reintegrados	Hombres	Mujeres
849	629	220

Fuente: Policía metropolitana de Neiva



A fecha de 2015, en el departamento de Huila se habían desmovilizado, de manera individual y colectiva, 629 hombres y 220 mujeres, estadística del ingreso a la “ruta de reintegración”, como previa preparación para la inclusión social.

De las personas desmovilizadas en el Huila; se promediaron las edades para conocer el total de excombatientes en capacidad de ejercer un oficio o actividad productiva, para mejorar sus condiciones de existencia, y se llegó a una aproximación de 828 personas en condiciones de ejercer un oficio productivo. La información se obtuvo de la siguiente estadística.

Tabla 5

*Promedio de reintegrados en el Departamento de Huila por edad.*

Edad	Total, reintegrados
Entre 18 &25	135
Entre 26 &40	521
Entre 41 & 60	172
Mayores de 60	11
Sin datos	10

Fuente: policía metropolitana de Neiva

Datos sobre los cuales se debía trabajar para gestionar la inclusión económica y la productividad. Los entes gubernamentales de Huila hicieron una importante valoración de las necesidades y los recursos locales para afrontar el posconflicto encontrando aspectos importantes, como los territorios altamente productivos donde tenían su asentamiento los grupos guerrilleros, utilizados para el cultivo ilícito, que en el posconflicto se podían convertir en un recurso natural aprovechable para la proyección económica.

Aunque para rescatar los terrenos, se debía entrar en un proceso de gestión, recuperación, legalización y repartición de la tierra. En su valoración, los huilenses también reconocieron la vocación agrícola de la región; donde se volvió cultural la tenencia de la tierra, dando origen a un

modelo económico propio, fundamentado en el minifundio, que diferenció el territorio en el país y no permitió el progreso industrial (Análisis Cartografía del Posconflicto en el Huila, 2017).

Los huilenses disponían del recurso natural y una reserva de capital humano, representado en la acumulación de conocimientos sobre el agro y el rol del empresario familiar, todos los recursos favorables para propiciar espacios de trabajo, y contribuir a la inclusión laboral de los desmovilizados y al desarrollo social y económico de la región.

En el departamento de Huila, el alto índice de reincidencia en la violencia, fomentó en la sociedad la necesidad de crear tasas de empleo, para facilitarle a los reinsertados, la materialización del trabajo y el reinicio de su vida civil, en un medio donde se sientan aceptados y realizados. Sin lugar a duda el trabajo trascendía a ser un elemento esencial para la inclusión social. “El trabajo es un hecho social” (Neffas, 1990) y un “factor de producción, que genera una ganancia, como parte del valor creado por los trabajadores” (Smith, 1958).

El trabajo como un “hecho social” y factor económico se registra en la Constitución política de Colombia bajo los atributos de ser un derecho. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. (Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 25). Ahora, la protección constitucional adquirida por el excombatiente al ser promovido a la ruta de reintegración, para la reincorporación economía y social, le concede el derecho a ejercer un trabajo en condiciones dignas.

Las expectativas creadas en la región huilense con la llegada del posconflicto, eran las de crear proyectos productivos orientados al desarrollo agrícola, como una alternativa esencial para materializar el trabajo y activar la economía, la puesta en marcha de negocios productivos representaba para los desmovilizados y los huilenses, una fuente de empleo inmediata y el progreso para la región, por el modelo económico y la cultura en la que venía militando sus pobladores. (Análisis Cartografía del Posconflicto en el Huila, 2017).

La FARC- EP, planteó el proceso de inclusión económica, desde un enfoque colectivo de participación, basado en un modelo de desarrollo social solidario, que trajo como alternativa económica los proyectos productivos colectivos y asociativos, observándose un cambio de enfoque de individual a colectivo y manifestando en sus negociaciones poco interés por la inclusión al mercado formal. Se propusieron las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) remplazadas a los 2 años por (ETCR).

Como ya se expuso, en el departamento de Huila, no hubo disposición de Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN, razón por la cual no se acondicionaron ETCR, pero se disponía de Áreas de Reincorporación, en los municipios de Íquira y Algeciras.

Así las cosas, entre los años 2016 y 2018 el departamento de Huila, contaba con la implementación y puesta en marcha de: un proyecto productivo dedicado a la piscicultura, (ASOPIEMPRE), con un total de 5 excombatientes beneficiarios, varios talleres automotrices y de confecciones establecidos en zona urbana, con 19 excombatientes beneficiarios, proyectos colectivos en los municipios de Garzón, Pitalito y Colombia, como: Demoliciones JAR, Lulos de Paz, Granadillas la Colombiana y Frutas Miravalles. Contando además con 4 Proyectos asociativos, Coagropaz en la ciudad de Neiva, Asopropaz en el municipio de Algeciras y Cooperativa Multiactiva en Íquira.

Los proyectos colectivos y asociativos, no presentan la estadística de personas reintegradas beneficiarias, pero es de suponer que han representado un beneficio para los desmovilizados. En este mismo orden de ideas, entre la voluminosa población desmovilizada en el departamento de Huila y los beneficios que pueden vislumbrarse, hay un desbalance, de donde se deduce el bajo impacto de los proyectos productivos como alternativa económica para la población reintegrada.

En el informe de inicios del 2019, correspondiente al año 2018, presentado por la ARN regional Huila, se reportó un total de 546 personas, 466 hombres y 80 mujeres, adelantando procesos de capacitación e inclusión económica, asignando a Neiva y Pitalito como los municipios que más desmovilizados han recibido. De la misma forma, se entiende la frase de adelantar proceso

en la creación de negocios productivo, la gestión de radicación, aprobación y asignación de recursos para la implementación y puesta en marcha de los proyectos productivos.

La ARN, ha venido gestionando la reintegración económica de los desmovilizados, tomando como segunda opción la empleabilidad en el mercado formal, en este sentido el ingreso al ámbito laboral de la empresa privada, se convierte en un objetivo difícil de logra para los desmovilizados en el departamento de Huila, por el retraso de la región en el desarrollo empresarial, debido a la expansión de los minifundios como pequeñas empresas familiares, también deteriorados por los efectos del conflicto armado interno y por los arraigos culturales.

Una prueba de lo expresado anteriormente, es el informe de competitividad departamental correspondiente al año 2015, donde el Huila se clasifico en el orden número 16, con un puntaje de 4,24 en una calificación sobre 10. La medida evaluó, la categoría de sofisticación e innovación económica. (Dinero, 2016). Las autoridades en el Huila expresaron dentro de un marco programático su proyección económica direccionada a cuatro pilares, la agricultura, la piscicultura, el turismo y el emprendimiento. (Dinero, 2016a).

En este mismo sentido y en relación con el ingreso de los excombatientes al mercado formal, es importante señalar la compleja estructura social, en la que debe encajar el desmovilizado el entorno empresarial, las exigencias educativas y la aceptación por parte de los grupos y la sociedad, donde se manifiesta la actitud discriminatoria. Sin embargo, en la articulación gobierno nacional autoridades locales, se observa la buena disposición para contribuir a la reintegración económica y social de los excombatientes.

Por su parte el reincorporado al no poder ejercer una actividad productiva, para la realización de sus aspiraciones, continuara acumulando sentimientos de exclusión social por la incertidumbre en el proyecto de vida futura y su marginalidad, que lo llevara a experimentar las circunstancias comunes de la sociedad vulnerable de Colombia, en la problemática del desempleo.

## **5.2. Inclusión del Excombatiente al Ámbito Laboral**

El capital humano, comenzó a desarrollarse como una teoría económica a partir de la década de los 50, con Lewis (1955), Mincer (1958), Schultz (1959), a causa de las preocupaciones que generaba la guerra fría sobre la economía y desarrollo de los Estados Unidos y se extendió dándole fin a la industrialización. Los exponentes de la teoría del capital humano convergen en que, se debe invertir en educación; si se quiere aumentar las capacidades para producir en beneficio personal y de utilidad para el desarrollo económico.

La idea de un recurso activo, representado en el capital humano, tomo fuerza en el mundo empresarial y en la modernización, razón por la cual la incursión al mundo laboral y el desempeño como trabajador, está ligado al conocimiento y por consiguiente a la educación. Así las cosas, en el contexto de posconflicto en Colombia, la ACR, planteó la educación como uno de los beneficios que brinda el gobierno para acceder a la reintegración exitosa.

Educar a los excombatientes representa para el estado colombiano, la construcción de una cultura de paz fundamentada en el dialogo y la negociación entre personas, para solucionar los problemas. (Organización de las Naciones Unidas, Acta 53/243), según la Organización de las Naciones Unidas el bajo nivel educativo de los desmovilizados, es la causa de las limitaciones para lograr la inclusión económica, de los reintegrados a la sociedad.

Se habla de la educación, dentro de un marco de transformación de la conducta y del conocimiento, de la adquisición de nuevos saberes. Invertir en capital humano; es reconocer la educación como un elemento productivo en la medida que, el conocimiento es un factor fundamental en el desarrollo de la economía, de propiedad de la persona que lo posee, después de obtenerlo como resultado de una inversión en educación. (Schultz, 1959).

En algunos enfoques económicos la educación es el motor del progreso “La inversión en capital humano es decisiva para que los países subdesarrollados alcancen el desarrollo no por la revolución, sino a través de la educación”. (Schultz, 1959, citado por Molina, 2017).

A nivel nacional, los excombatientes han presentado limitantes para acceder a un empleo y al conocimiento complejo, atribuidos a los bajos niveles de educación, clasificados entre un alto índices de analfabetismo y la terminación de la básica primar. La falta de interés por parte de las personas desmovilizadas, para culminar las capacitaciones y la desmotivación por los requisitos exigidos para ingresar a los programas de educación, son los principales impedimentos para recibir una formación compleja, que facilite el ingreso al campo laboral.

La actitud despectiva de los desmovilizados, para concluir los programas educativos y la reincidencia en la violencia, puede relacionarse con la falta de responsabilidad para asumir la reintegración a la vida civil, o que su participación en el proceso este motivada por el beneficios monetarios, dispuesto por la Ley “en la medida que lo permita su situación jurídica”, se otorgan beneficios por desmovilizarse, por colaboración con la justicia, en información y por la entrega de material de guerra, entre otros. (Decreto 2767, de 2004).

Según informes de la ACR, a fecha del año 2013, unos 5.586 excombatientes, 4.569 hombres y 1.017 mujeres, cursaban estudios técnicos y técnicos profesionales, de los cuales un total de 71 desmovilizados pertenecían al departamento de Huila y 53 tenía residencia en el municipio de Neiva. ACR 2013, (en: La educación superior y los procesos de reintegración en Colombia. pp 20-21). En Neiva se puede verificar la atención en programas de educación y el interés centrado en la persona como un potencial de innovación y fuerza de trabajo.

Sin embargo, el proceso de formación de los excombatientes sigue mostrando sus debilidades y amenazas, que representan una desventaja para la competitividad en el mercado laboral. La educación en el posconflicto debe constituirse como “una inversión pública”. Schultz, (1959a), de responsabilidad del estado, la sociedad, las empresas y los reintegrados, por traer la implicación de la libertad de las personas, para adquirir y actualizar los conocimientos en el desarrollo y reserva del capital humano.

El capital humano, es el conjunto de las capacidades productivas de un individuo adquiridas por la asimilación de conocimientos generales o específicos, que puede ser acumulados o usarse, a decisión propia. (Becker, 1983). “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115, de 1994).

El trabajador entra a ser parte del eje de la empresa, el motor que impulsa el progreso. La acumulación de saberes adquiridos, le permite al individuo que los posee realizar de manera ágil una actividad productiva, “al invertir en sí mismos, los seres humanos aumentan el campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden aumentar su bienestar”. (Schultz, 1985). El trabajador obligatoriamente debe reunir las condiciones, para obtener el empleo y sostener la fuente de trabajo, esa circunstancia requiere de un cambio de actitud de la sociedad frente al desmovilizado, y la adquisición del conocimiento por parte del reintegrado.

El trabajo implica de la persona que lo ejecuta el aporte de saberes, energía y destrezas, que por lo general son retribuidas y se convierten en un estímulo emocional para la inclusión social. El trabajo es la actividad esencial en la organización de la sociedad, “En dicha actividad la persona aporta energía, habilidades, conocimientos y otros diversos y obtiene algún tipo de compensación, material, psicológico y social”. (Peiró, 1996, p.19).

De igual manera, la materialización del trabajo en la organización de la sociedad está sujeto a condiciones como la creación de tasas de empleo, el derecho y la libertad a participar en las ofertas y la empleabilidad, donde el trabajador depende del empleador.

La empleabilidad viene rodeada de eventos, tendiente a puntualizar en el capital humano para su competitividad en el mercado, debido a la influencia de los nuevos conceptos sobre economía y desarrollo introducidos por la sociedad, de aquí las exigencias para la contratación del trabajador, como la evaluación de los conocimientos y competencias, para medir la capacidad de desempeño en la actividad productiva y la experiencia laboral.

La empleabilidad abarca las calificaciones, los conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida". (Foro Mundial de Educación, 2004).

La experiencia laboral, es la adquisición de nuevos conocimientos, asimilados de la observación, y el contacto con los recursos técnicos en la práctica de una actividad productiva. Se cree que la experiencia laboral, optimiza el desempeño del trabajador, lo vuelve ágil y eficiente, garantizando el manejo adecuado del tiempo, la cantidad y la calidad de la producción.

Se observa de manera global una evolución de la estructura económica, que lentamente deja atrás la industrialización, para ubicar el conocimiento como la base de la producción y el desarrollo económico, integrando 3 factores como son, capital, trabajo y capital humano. El conocimiento viene a representar el factor esencial en la organización y planeación del trabajo y la productividad, por consiguiente se requiere en el mercado formal y en el emprendimiento de los negocios productivos, el avance económico y el orden social.

A toda la estructura actual en la que deben encajar los reintegrados, para la reincorporación económica y social, se suman otros aspectos como son, la restricción de las empresas privadas, para recibir reinsertados guerrilleros en su nómina de empleados; es una posición generalizada y atribuidos a la estigmatización, como fenómeno que se presenta en la sociedad limitando la oferta y la oportunidad de las personas en vía de reintegro.

La estigmatización se ve reflejada en la discriminación. Para la sociedad los desmovilizados representan un riesgo, se identifica al excombatiente como una persona peligrosa, agresiva y delictiva. Una idea de esta dimensión conlleva al temor y desconfianza, que desfavorece la contribución de la sociedad con la inclusión laboral del reincorporado.



Para Zepeda (2005) “la discriminación es una conducta culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de persona sobre la base de un perjuicio negativo”. (p.19). En este caso la discriminación viene dada por la participación en grupos al margen de la ley, donde supuestamente imperan los vicios y defectos. Por otro parte, se observa el interés de las empresas privadas, por obtener incentivos tributarios, con el objetivo de aumentar su rentabilidad.

En este sentido la ARN en coordinación con el SENA y otras instituciones, han conformado una red de apoyo a los excombatientes, para la rehabilitación psicológica, la educación formal y no formal, procurando mantener la mediación con el sector empresarial privado, para la inclusión laboral de las personas desmovilizadas. Para la ARN, continua siendo importante la concientización de las empresas privadas del departamento de Huila, en la necesidad de incluir en el área laboral a los excombatientes de la FARC, para minimizar el alto riesgo de la conformación de nuevos grupos al margen de la ley y por consiguiente la reincidencia en la violencia.

Aunque para el año 2018, los escasos empresarios que conforman el sector privado en el departamento de Huila, habían mejorado en su empatía por el proceso de inclusión económica de los reintegrados y comenzaban aceptar algunos reinsertados guerrilleros en su nómina, se necesitaba una mayor participación de las empresas privada en el proceso.

Eduardo Londoño, en su tarea de coordinador de la ARN, en la región de Huila expreso: “Siempre es un reto para nosotros que los empresarios continúen brindando oportunidades, siempre va a ser importante hacerles este llamado, a que se les permita a estas personas hacer un proceso de selección y participar en las convocatorias laborales” (Londoño, 2017).

A nivel nacional la gestión mediadora de la ARN, para facilitar el ingreso de la población desmovilizada al sector de las empresas privadas en Colombia, se mantuvo en descenso en el segundo semestre del año 2017, según los resultados de la gran encuesta Pyme, la actitud de los empresarios frente al proceso , se promedió de la siguiente manera:

Tabla 6

*Análisis comparativo de oferta de empleo para reinsertado bajo criterio de empresarios Pyme.*

Opción	Sector	Porcentaje actual	Porcentaje anterior
Bajo ningunas circunstancias contratarían reinsertados de la guerrilla.	Industria	37%	21%
	Comercio	37%	23%
	En servicios	29%	19%
Contratarían reinsertados siempre que tengan la capacitación requerida	Comercio	28%	22%
	En servicios	28%	26%
	Industria	24%	24%
Contratarían reinsertados con la capacitación requerida y además si representan un beneficio tributario adicional.	En servicios	28%	26%
	Industria	23%	26%
	Comercio	19%	25%

Fuente: Gran encuesta Pyme 2017

En el escenario macro y micro empresarial de Colombia, por el informe de la Gran Encuesta Pyme, se evidencia un aumento en la posición de los empresarios, de no contratar reinsertados guerrilleros en ninguna circunstancia y una minoría que contrataría bajo la condición de estar capacitados y representar un beneficio tributario adicional.

### 5.3. Los Proyectos Productivos y el Reintegro

Para la presidencia de la república, la garantía económica es un factor importante en el proceso de incorporación del excombatiente a la vida civil, porque le ofrece la posibilidad de retomar el plan de vida, suplir las necesidades apremiantes de salud, alimentación, educación y además interactuar en comunidad. La economía se entiende como “el ancla principal para que los excombatientes permanezcan en la legalidad”. (Nussio, 2013, p.13).

Joshua Mitrotti director de la ARN, se refirió a la labor de activar la economía de los reinsertados, como un desafío que debe iniciarse con la educación.

Luego de la firma de Acuerdo Final, la entidad asumió el reto de reincorporar y fortalecer las habilidades de los excombatientes de las FARC, a través de la consecución de iniciativas formativas enfocadas en el campo y el desarrollo de proyectos productivos individuales y asociativos. (Mitrotti, 2017).

Un proyecto productivo es la proyección y puesta en funcionamiento de un negocio con la finalidad de generar rentabilidad económica, y ganancias en dinero. El objetivo de crear proyectos productivos es buscar solución a un problema de necesidad inmediata, que requieren de un esfuerzo para la creación de un producto o servicio. La importancia de implementar proyectos productivos sostenibles, urbanos y rurales es la de promover actividades económicas, productivas y permanentes a nivel local, regional y nacional.

En cuanto a los proyectos productivos, como fuente de empleo y rentabilidad de los desmovilizados, vienen a potenciar las dos variables que sustentan la inclusión al mercado laboral, la empleabilidad y la productividad. En el ejercicio de su profesión u oficio como empleados, los reintegrados tienen la oportunidad de apropiarse de nuevas habilidades por medio del adiestramiento en una actividad, consiguiendo aumentar su productividad. (Becker, 1983).

Por otra parte, el aporte económico externo, la inversión en educación, la asistencia técnica y la dinámica de acompañamiento, podrían asegurar que los proyectos productivos representan una alternativa económica rentable y duradera para el reinsertado. No obstante, los interrogantes surgen tras las voces de insatisfacción de los actores, ¿los proyectos productivos son una fuente de empleo duradera para los reincorporados? ¿La educación dada a los nuevos trabajadores es suficiente para que puedan calificar y permanecer dentro del mercado laboral? ¿Las competencias desarrolladas le permiten mejorar su desempeño y adaptarse al cambio?

“La inversión en educación constituye no solo un gasto de consumo, sino una inversión con rendimiento económico, ya que aumenta la productividad del trabajador”. Schultz, (1959.b). Ahora a la inversión en la educación de los reinsertados, se suma el capital semilla aportado por el gobierno y organismos internacionales, que según los medios de comunicación masiva se consideran suficientes, para la gestión exitosa de las unidades productivas.

Los antecedentes legales, muestran que a nivel gubernamental existen las estrategias y los organismos para suplir la necesidad de inclusión laboral, la Oficina de Alta Comisión para la Paz, asignada para crear oferta sostenible de empleo, por medio del Programa Proyectos Productivos y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) con el Ministerio de Agricultura, son instituciones encargadas de gestionar la extinción de dominio y caracterizar los predios, para implementar los proyectos productivos.

Sin embargo, las manifestaciones de insatisfacción por parte de las personas desmovilizadas y el número de personas reintegradas que se benefician de los proyectos productivos, donde se beneficia 1 persona y grupos entre 5 y 19 personas, evidencian que los proyectos productivos no cumplen con su finalidad dentro del proceso de paz, como alternativa de inclusión económica, para las personas reintegradas a la vida civil.

En noviembre del año 2018 la ARN, entrego un nuevo informe del proceso de reintegración social en el Huila, donde asegura que 21 excombatientes habían culminado exitosamente su proceso de reintegración, entendiéndose la reintegración exitosa como el resultado final, 21

excombatientes recuperados en todas las áreas de la vida, emocional, social y económica, que es el tema que aquí interesa, es un resultado mínimo cuando se está frente a un proceso de reincorporación, de centenares de excombatientes entre hombres y mujeres.

El ADR, escogió a los campesinos y productores de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, como beneficiarios de nuevos proyectos productivos. El departamento de Huila sin contar con ZVTN, fue incluido en el programa, dentro de la aprobación de 45 proyectos productivos orientados al negocio ganadero, piscícola y a establecer granjas agrícolas, donde los excombatientes de la FARC, no participaron.

La ARN, en el mismo informe registro una cifra aproximada de 1.000 personas con sus familiares, como nuevos asentamientos en lugares donde funcionan proyectos productivos, en “consideración entró a establecer medidas para vincular a los proyectos productivos los excombatientes allí asentados” así lo informó en agosto de 2018 el Componente de Verificación Internacional, CINEP – CERAC.

## 6. Conclusiones

El Departamento de Huila, ha hecho del posconflicto un proceso de responsabilidad regional, donde se tomaron como modelos proyectos productivos individuales, asociativos y colectivos, para promover la inclusión económica de la población desmovilizada y reintegrada a la vida civil. La región presenta un avance en el desarrollo económico, por el surgimiento de nuevos negocios productivos donde se benefician y participan de manera fusionada, excombatientes y víctimas del conflicto armado interno, campesinos, pequeños productores y la población vulnerable de la sociedad huilense.

Los proyectos productivos que actualmente potencian la económica del Huila, están orientados a la agricultura y labores del campo, de utilidad para satisfacer las necesidades básicas a corto plazo, y según los entes gubernamentales con proyección futura para adquirir un capital propio a largo plazo, porque el ultimo propósito se ve condicionado a la responsabilidad del gobierno y a las personas beneficiarias en sus deseos de superación y visión.

Como alternativa económica, para los excombatientes reincorporados a la vida civil en el departamento de Huila, los proyectos productivos sostenibles tienen un bajo impacto por el retraso en el proceso de gestión, aprobación e implementación, se presenta incumplimiento en los acuerdos y en la legalización de tierra. No se observan las políticas de gobierno sólidas, para puntualizar en la gestión y el objetivo pleno de la inclusión económica de los reintegrados, que supere las limitaciones de la estructura social actual. Por otro lado, la sociedad no ha recibido la orientación pedagógica para la participación, en el sentido de ser una responsabilidad de todo el acogimiento y la aceptación de la población desmovilizada, se requiere de una actitud positiva.

No obstante, los proyectos productivos sostenibles influyen de manera positiva, en ofrecer una mayor oportunidad de empleo con relación al mercado formal, que se ve obstaculizado por la parcialidad y la estigmatización, reflejada en la discriminación y otras conductas que se han tomado como cultura, entre esos el rechazo por la edad y la inestabilidad en las contrataciones, donde no se valora el capital humano, representado por el trabajador.

Para los desmovilizados, los proyectos productivos representan una alternativa de inclusión económica inmediata, como respuesta al estado de inactividad, al que entran después de la desmovilización y para poder suplir sus necesidades básicas. A la vez son una motivación emocional para iniciar la reconstrucción de su proyecto de vida y el de su familia, con posible proyección futura y finalmente la solución al problema de la falta de empleo, por la escasa oportunidad laboral en el mercado formal.

En el caso de los desmovilizados de la FARC-EP, además de ser una alternativa de inclusión económica inmediata, el enfoque de los proyectos productivos, colectivos y asociativos, van dirigido a un modelo de desarrollo social específico, encajado dentro de su ideología política. Por otra parte la población desmovilizada tiene poca participación en la puesta en marcha de los proyectos productivos, por varias circunstancias, las más notables son, la ausencia de una política pública que oriente de manera efectiva el proceso y los bajos niveles de educación, que requieren de responsabilidad y espacios de tiempo para superarlos.

### **Opinión Personal**

La reintegración económica y social de los excombatientes del conflicto armado en Colombia, y las acciones que rodean el contexto, presentan una problemática donde convergen un sinnúmero de interrogantes y expectativas. El avance lento de los procesos de gestión de los proyectos productivos, como tasas de empleo creadas por el gobierno, los vacíos que dejan las políticas públicas enfocadas al posconflicto, la actitud de las empresas privadas frente a la situación del reintegro económico de los desmovilizados, la parcialización y discriminación, la escasa ofertas y las condiciones sociales convertidas en cultura, focalizan una situación compleja, con una mínima literatura para hacer un seguimiento minucioso de la problemática, llevan a pensar que los excombatientes reintegrados a la vida civil, vienen a confrontarse con las mismas circunstancias que afectan a la sociedad colombiana, porque al ser incluido no puede ser ajeno a la problemática del país, en este mismo sentido es posible avanzar en el progreso económico de las regiones, como ha ocurrido en otros países de América, y continuar reincidiendo en la violencia, como consecuencia de un sistema económico débil, con mayor posibilidad de exclusión.

### Referencias Bibliográficas

Análisis cartográfico del postconflicto en el Huila. (2017). *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.co/2017/05/29/analisis-cartografico-del-posconflicto-en-el-huila/>

Azam, A. (2019). *Informatvx*. Recuperado de <https://informatvx.com/los-acuerdos-que-marcaron-la-paz-en-el-salvador>

Blanco, J. (2009). *Análisis de logros y dificultades del programa de proyectos productivos para los desmovilizados de la localidad de Rafael Uribe Uribe de Bogotá 2006-2008. Universidad de San Buenaventura. Colombia 2009.* Recuperado de <http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/65956.pdf>

Bleier, E. U. (2011). Reconstruir colectivamente el tejido social. *El Espectador*. Colombia . Bogota.

Burchardt, T. (2000). *Exclusión Social: concepto y evidencia en Breadline Europe medición de la pobreza*. Edición de D. Gordon y P. Townsend

Componente de Verificación Internacional. (2018). CINEP-CERAC. Informe de 2 de febrero de 2018.

Concejo Nacional de Reincorporación (2018). *Sesión 88 de noviembre 15 de 2018*. República de Colombia.

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2008). *Documento 3554 de 2008*. República de Colombia.



Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2018). *Documento 3931, mayo 22 y 23 de 2018*. República de Colombia

Constitución Política de Colombia. (1991). *Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 2, 22 y 25*. Colombia.

Decreto 897. (2017). *Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones*. República de Colombia.

Decreto 2027. (2016). *Por el cual se crea el Consejo Nacional Reincorporación*. República de Colombia.

Revista Dinero (2016). Portal especializado en noticias de economía. *El Huila prevé convertirse en referente de desarrollo económico en Latam. Artículo*. Colombia. Recuperado de <https://www.dinero.com/pais/articulo/desarrollo-econonomico-del-departamento-del-huila-en-2016/231202>

Foro Mundial de Educación. (2004). *Educación para otro mundo posible*. Porto Alegre, Brasil. Recuperado de <http://latinoamericana.wiki.br/es/entradas/f/foro-mundial-de-educacion>

Frayle, S., Reyes, J., y Rodríguez, L. (2007). *La reincorporación social del desmovilizado a través de proyectos productivos*. Universidad de la Salle. Colombia. Recuperado de <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1735/98062218.pdf?sequ>

Becker, G. (1983). *El capital humano*. Segunda Edición. Alianza Editorial, S.A. Madrid, España.

Gonzalez, S. (2015). *Desafíos económicos de la paz. El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/economia/desafios-economicos-de-la-paz-articulo-588533>

Herrera y González (2013). *Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en DDR (IDDRS)*. Colombia Internacional, 77, 272–302. Recuperado de <http://doi.org/10.7440/colombiaint77.2013.10>

Henao (2013). *Modelo de atención psicosocial de la política de reintegración de grupos armados ilegales una pregunta por la identidad* (Tesis de grado). Universidad del Rosario, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Programa de Psicología 2016

Labrador y Gómez, (2010). *Desarme Desmovilización y Reintegración en Colombia*. Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco.

La Nación (2019). Artículo 925, de 29 de abril de 2019. Colombia.

Ley 975. (2005). Diario oficial N° 45.980, de julio 25 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Colombia.

Ley 115. (1994). *Ley General de Educación de febrero 8 de 1994*. Colombia.

Londoño, E. (04 de Abril de 2017). *sigep*. Recuperado de <http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M506370-8025-4/view>

Machado, A. (08 de octubre de 2017). *Artículo 1354. ¿Y los desmovilizados en el Huila qué? La Nación*. Colombia.

Mincer, J. (1958). "Investment in Human Capital and Personal Income Distribution" *Journal of Political Economy*, 66(4), 281-302.

- Neffas, J. (1990). *Los riesgos psicosociales en el trabajo*. Contribución a su estudio. Recuperado de <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Neffa-Riesgos-psicosociales-trabajo.pdf>
- Nussio, E. (2013). *Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes: políticas y actores del postconflicto*. Colombia Internacional.
- Organización de las Naciones Unidas. (1999). *Acta 53/243, Declaración y programa de acción sobre una cultura de paz*. Quincuagésimo tercer período de sesiones. Tema 31 del programa, de 6 de octubre de 1999.
- Organización de las Naciones Unidas. (1987). *Informe de la Comisión mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*.
- Organización Internacional para las Migraciones OIM. (29 de Mayo de 2017). *La Nación*. Recuperado el 25 de Mayo de 2019, de <http://www.lanacion.com.co/2017/05/29/analisis-cartografico-del-posconflicto-en-el-huila/>
- Parsons, T. (1965). Full Citizenship for the Negro American? A Sociological Problem”, *Daedalus*, 94(4), Cambridge MA, The MIT Press.
- Peiró, J. (1996). Tratado de psicología. *La actividad laboral en su contexto*. Madrid: Ramón Areces.
- Peresson, T. (1997). *Análisis de estructura análisis de coyuntura: Metodología*. Cuarta Edición, Editores Indo-American Press Service. Bogotá, Colombia. 1989.
- Restrepo, L. (2003). *Seminario internacional, Preparar el posconflicto: Problemas sociales y jurídicos de la reconciliación*. Universidad Central, Embajada de Italia, Instituto Italiano

de Cultura, Universidad de Bolonia, y Universidad de Udime, Bogotá, septiembre 2 de 2003.

Roth (2012). *Políticas Públicas módulo 1. Gustavo Jatib Naizir*. Corporación Universitaria del Caribe CECAR. Educación virtual. Colombia.

Schultz (1959). *Foro capital humano y guerra fría*. Iván Molina, septiembre 23 de 2017, La Nación.

Schultz (1985). *Investing in people. The economics of population quality*. pp. 9- 135. Editorial Ariel, S.A. España, diciembre 1985.

Sen, A. (2000). Social exclusion: concept, application and scrutiny, en Social development papers, N 1, ADB

Smith, A. (1958). *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*. Mexico, FeE, 1958, p, 51-52.

William, J. (2019). *División de desarrollo humano*. Universidad de Manizales. Colombia.

Zepeda, J. (2005). Democracia y no discriminación: Una relación histórica y conceptual. *Revista Intedisciplinar de estudios histórico – jurídicos* (21), 19.